



Jutjat Contenciós Administratiu núm. 05 de Barcelona

Avinguda Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I - Barcelona
08075 Barcelona

Tel. 93 5548463
Fax: 93 5549784
A/e: contencios5.barcelona@xij.gencat.cat

NIG 0801945320198007509

Drets Fonamentals 359/2019 B

Matèria: PE altres drets fonamentals

Entitat bancària: **Banc de Santander**
Per a ingressos en caixa, concepte: 0906000000035919
Pagaments per transferència bancària: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
Beneficiari: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 05 de Barcelona
Concepte: 0906000000035919

Part recurrent/sol·licitant/executant: CENTRAL
SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS
(CSIF)

Procurador/a:
Advocat/ada: Antonio Martínez Luján
Representant Jesús Escanilla Rull

Part demandada/executada: GENERALITAT DE
CATALUNYA. DEPARTAMENTS DE POLÍTQUES
DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, JUSTÍCIA I
PRESIDÈNCIA, CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA
COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA
(CS-CONC), FEDERACIÓ DE EMPLEADAS Y
EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS-UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (F.e.S.P.-U.G.T. de Catalunya)
Procurador/a: Jorge Rodriguez Simon
Advocat/ada: MONTSERRAT ESCODA MILÁ
Advocat/ada de la Generalitat

SENTÈNCIA NÚM. 83/2020

Magistrada: Montserrat Raga Marimon

Barcelona, 22 d'abril de 2020

Fets

Únic.- La part actora va presentar recurs contenciós administratiu especial a tramitar d'acord amb el procediment per a la protecció de drets fonamentals impugnant la resolució dictada per la directora general de la Funció Pública de 12 de novembre de 2019 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de 10 de juliol de 2019 per la qual es comunica a la part actora, la Central Independiente y de Funcionarios (CSIF) que no té dret a formar part de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Acomplerta la tramitació prevista a l'article 114 i ss ven quedar les actuacions concloses per resoldre.





Raonaments jurídics

Primer.- Inadmissibilitat del recurs per extemporani

L'article 115. 1 Llei 29/98, del 13 de juliol estableix " El termini per interposar aquest recurs és de deu dies, que es computen, segons els casos, des de l'endemà de la notificació de l'acte, la publicació de la disposició impugnada, el requeriment per al cessament de la via de fet, o el transcurs del termini fixat per a la resolució, sense cap altre tràmit. Quan la lesió del dret fonamental tingui l'origen en la inactivitat administrativa, o s'hagi interposat potestativament un recurs administratiu o, tractant-se d'una actuació en via de fet, no s'hagi formulat el requeriment, el termini de deu dies s'inicia quan hagin transcorregut vint dies des de la reclamació, la presentació del recurs o l'inici de l'actuació administrativa en via de fet, respectivament."

La part actora recorre davant del silenci administratiu ja que el recurs de reposició contra la resolució de 10 de juliol de 2019 es va interposar l'1 d'agost de 2019, i aleshores transcorreguts els 30 dies (10+20) es va interposar en el 13 de setembre de 2019 el recurs en via judicial.

Segon.- Fons de l'assumpte

Cal tenir en compte la STS de 18 de gener de 2018 quan ens diu " *El juicio de la Sala* .

Hemos de decir, ante todo, que, efectivamente, tal como apunta el Ministerio Fiscal, la cuestión controvertida no sólo presenta el interés casacional objetivo advertido por el auto de la Sección Primera sino también posee trascendencia constitucional. El recurso de SIPLA-CSL no plantea solamente cuestiones de legalidad ordinaria, además, incide en el contenido del derecho fundamental a la libertad sindical al que se añade el derecho a la negociación colectiva, según viene diciendo el Tribunal Constitucional. De ahí que, pese a centrarse el litigio en la interpretación que ha de darse al artículo 36.3 del [Estatuto Básico del Empleado Público](#), no hay duda de que, de tener razón el recurrente, se habría producido una vulneración de ese precepto que comportaría una lesión del derecho fundamental. Es decir, se daría el supuesto previsto expresamente por el [artículo 121.2](#) de la [Ley de la Jurisdicción](#) .

Precisado ese extremo y corregida, por tanto, la interpretación de la sentencia recurrida en ese punto, debemos señalar ya que ha entendido correctamente el citado artículo 36.3 que dice lo siguiente:

3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación.





Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación.

Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate

Dicho de otro modo, es ajustado no sólo al tenor literal sino también al sentido de la regulación de la que forma parte mantener que la representatividad mínima que exige para que una organización sindical que no forma parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas esté presente en la Mesa que negocia las cuestiones comunes a funcionarios y laborales debe poseerla por separado en ambos ámbitos: el del personal funcionario y el del personal laboral.

Este es el criterio que viene manteniendo la Sala en las sentencias indicadas por el Ministerio Fiscal, no sólo en la que indica el auto de la Sección Primera. Es más, en la de 11 de octubre de 2016 (casación 2651/2014) ya se enfrentó esta Sección Cuarta con unos argumentos semejantes a los que ha utilizado aquí el SIPLA-CSL. Dijimos para rechazarlos lo siguiente:

La interpretación que ha seguido es respetuosa con la literalidad de los artículos 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985 y 36.3 del [Estatuto Básico del Empleado Público](#) y no vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical en su contenido adicional del derecho a la negociación colectiva.

El desarrollo del mismo mediante la Ley Orgánica 11/1985 que relaciona la capacidad de negociación colectiva con la representatividad sindical y que vincula a determinados niveles de la misma la participación en las instancias en las que se lleva a cabo esa negociación con las Administraciones Públicas, no ha merecido reproches desde el punto de vista de su constitucionalidad. Y, en lo que ahora nos interesa, no es cuestionado por la recurrente. Lo que se discute (...) es, únicamente, cómo se ha de calcular ese 10% de representatividad del que venimos hablando.

Pues bien, puestos a interpretar estas disposiciones legales nos encontramos con que la recurrente no niega que puedan ser entendidas como la sentencia de instancia ha considerado correcto. En realidad, lo acepta pero dice que hay otra interpretación posible, más favorable a la efectividad del derecho fundamental: la





que [la recurrente] defiende pues le abriría el paso a esa mesa en que se negocian extremos comunes a los distintos colectivos de empleados públicos.

Sin embargo, la recurrente hace supuesto de la cuestión ya que no ha demostrado que sea más favorable al ejercicio del derecho fundamental franquear el acceso a una instancia negociadora de proyección general, es decir que tratará de cuestiones relativas a funcionarios, personal estatutario y laboral, a sindicatos que no alcanzan la representatividad mínima considerada necesaria. En efecto, la regulación legal del acceso a la negociación con las Administraciones Públicas ha tratado de conjugar el criterio de favorecer la pluralidad sindical con el de la suficiente implantación de las organizaciones llamadas a esa negociación. De ese modo, busca que se tengan en cuenta con la mayor amplitud los intereses de los trabajadores que los sindicatos están llamados a expresar y defender (artículo 7 de la Constitución) y, también, que los acuerdos que se alcancen, de un lado, respondan a esos intereses y, de otro, que cuenten con el apoyo de quienes poseen una representatividad significativa.

Desde estas premisas, no sólo resulta que es posible interpretar esos artículos 7.2 y 36.3 como se ha hecho sino que ha de hacerse así desde la consideración del sentido de la negociación colectiva y de su conexión con la representatividad sindical. Es más, estas razones privan a la conjunción "y" del artículo 7.2 de todo sentido disyuntivo y se ven reflejadas en el artículo 36.3, que refiere claramente la exigencia de representatividad a cada uno de los ámbitos de los empleados públicos, tal como ha puesto de manifiesto la sentencia citada por el Ministerio Fiscal

Luego, en la sentencia de 28 de marzo de 2017 (casación 632/2016) confirmamos otra de la Sala de Madrid para la que la representatividad superior al 10% del sindicato allí recurrente entre los funcionarios no le legitima para estar presente en todos los foros en que se trate de cuestiones relativas a funcionarios, entre ellos la mesa del artículo 36.3 del [Estatuto Básico del Empleado Público](#).

A estas consideraciones solamente debemos añadir ahora que, en contra de lo que afirma la recurrente, el criterio que consideramos acertado no significa imponer algo que no exige el precepto de referencia ni convertir el requisito del 10% en otro del 20%. Para que sucediera esto último, sería necesario que el artículo sólo requiriera el 10% y de ser así sobraría toda discusión y no habría existido el pleito. De otro lado, el sentido que haya que dar a la conjunción "o" depende del contexto en que se use. A este respecto, se debe tener en cuenta que el apartado 3 del artículo 36 se remite, en lo relativo a la representatividad necesaria para acceder a las Mesas comunes, a los criterios aplicables a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que son los de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985 , con lo que valen también aquí las interpretaciones que se han dado del apartado 2 de este último. Además, esa





conjunción la utiliza el precepto en el tercer párrafo del artículo 36.3 y SIPLA-CSL ha precisado que el que contempla su caso es el párrafo segundo en el que sí se utiliza la conjunción "y".

Tampoco advertimos el exceso que denuncia el SIPLA-CSL ni encontramos fundada la queja de que se le impide indebidamente participar en la negociación de las cuestiones comunes a funcionarios y laborales. Es verdad que la disposición legal le cierra el camino para acceder a esa Mesa pero lo hace del mismo modo que se la cierra a cualquier organización que no alcance la representatividad necesaria. Esa es una consecuencia de la necesidad de arbitrar soluciones que hagan operativa la negociación colectiva. Igualmente, por su limitada representatividad, mejor dicho, por carecer de ella entre el personal laboral, no parece justificado que participe en la negociación de condiciones de trabajo que afectan también a este último."

D'aquesta manera el certificat emès per la subdirecció general de Relacions Laborals acredita que el sindicat recurrent ha obtingut més d'un 10% de membres dels corresponents òrgans de les Administracions Públiques en tot el territori nacional " (foli 3 expedient).

No obstant, no acredita quina representativitat té a nivell autonòmic ni en els àmbits laborals i funcionaris, que no arribaria a aquests mínims.

L'article 36 EBEP estableix "Es constitueix una Mesa General de Negociació de les administracions públiques.

La representació d'aquestes ha de ser unitària, estar presidida per l'Administració General de l'Estat i tenir representants de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en funció de les matèries que s'hagin de negociar.

La representació de les organitzacions sindicals legitimades per estar presents d'acord amb el que disposen els articles 6 i 7 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, s'ha de distribuir en funció dels resultats obtinguts a les eleccions als òrgans de representació del personal, delegats de personal, juntes de personal i comitès d'empresa, en el conjunt de les administracions públiques.

2. Són matèries objecte de negociació en aquesta mesa les que enumera l'article 37 d'aquest Estatut que siguin susceptibles de regulació estatal amb caràcter de norma bàsica, sense perjudici dels acords a què puguin arribar les comunitats autònomes en el seu corresponent àmbit territorial en virtut de les seves competències exclusives i compartides en matèria de funció pública.





És específicament objecte de negociació en l'àmbit de la Mesa General de Negociació de les administracions públiques l'increment global de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques que correspongui incloure en el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat de cada any.

3. Per a la negociació de totes les matèries i condicions de treball comunes al personal funcionari, estatutari i laboral de cada Administració pública, s'ha de constituir a l'Administració General de l'Estat, en cadascuna de les comunitats autònomes, ciutats de Ceuta i Melilla i entitats locals una Mesa General de Negociació.

Són aplicables a aquestes meses generals els criteris que estableix l'apartat anterior sobre representació de les organitzacions sindicals en la Mesa General de Negociació de les administracions públiques; s'han de prendre en consideració en cada cas els resultats obtinguts a les eleccions als òrgans de representació del personal funcionari i laboral del corresponent àmbit de representació.

A més, també han d'estar presents en aquestes meses generals les organitzacions sindicals que formin part de la Mesa General de Negociació de les administracions públiques sempre que hagin obtingut el 10 per 100 dels representants a personal funcionari o personal laboral en l'àmbit corresponent a la mesa de què es tracti.”

Estem davant de la Mesa prevista a l'article 36.3 i queda clar, d'acord amb l'apartat tercer i la STS 18 de gener de 2018 que el mínim del 10% ha de ser en els representats a personal laboral i funcional en l'àmbit corresponent a la mesa de què es tracti, per tant, autonòmic. I aquest extrem no resta acreditat. Per tant, no s'ha produït cap vulneració dels drets fonamentals al·legats per la part actora ja que no es compleixen els requisits que per al seu reconeixement preveu la LOLS .

Segon.- Costes

D'acord amb l'article 139 de la llei jurisdiccional imposable les costes processals a la part actora en la quantia màxima per tots els conceptes de 600 euros seguint els criteris orientatius que en matèria de costes va aprovar la junta de jutges d





´aquesta jurisdicció i ciutat de 17 de novembre de 2016.

Decisió

DESESTIMO el recurs contenciós administratiu interposat per la representació processal de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios contra la resolució dictada per la directora general de la Funció Pública de 12 de novembre de 2019 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de 10 de juliol de 2019 per la qual es comunica a la part actora, la Central Independiente y de Funcionarios (CSIF) que no té dret a formar part de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Imposo les costes processals a la part actora en la quantia de 600 euros seguint els criteris orientatius aprovats per acord de la junta de jutges d'aquesta ciutat i jurisdicció de 17 de novembre de 2016.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts, i feu-los saber que contra la mateixa s'hi pot interposar un recurs d'apel.lació en un efecte davant d'aquest Jutjat en el termini de 15 dies i que serà resolt per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així ho acordo i ho signo

Codi Segur de Verificació: LT4BFO442UJUEJ76LJ2AQICW09LXTYXZ

Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: <https://ejcat.justicia.gencat.cat/AP/consultaCSV.html>

Signat per Raga Marimon, Montserrat.

Data i hora 22/04/2020 18:59

